



MINISTERIO  
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA POLICÍA  
POLICÍA NACIONAL

## O F I C I O

S/REF.: Expediente nº **001-041524**  
FECHA: 25 de agosto de 2020  
ASUNTO: Estudio investigación

### DESTINATARIO:

El día 4 de marzo de 2020 tuvo entrada en esta Dirección General una solicitud de información efectuada por [redacted] a través del Portal de la Transparencia, con número de expediente arriba referenciado, en la que solicitaba:

*"1. Suscripción de los correspondientes conciertos, contratos o convenios celebrados con terceros en el marco de prestación de servicios sanitarios, asistenciales y sociales que se ejecuten en todos o algunos de los centros de Internamiento para extranjeros de España.*

*2. - Formación especializada impartida al personal que actúa en los CIE y/o que se tiene en cuenta para celebrar cualquier convenio o concierto para la prestación de servicios (planes de formación o exigencias curriculares). Detallado desde 2014-actualidad.*

*3. - Medidas cautelares adoptadas en el marco de un procedimiento de expulsión o devolución contemplado en la ley de extranjería en el artículo 61 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Detallado por provincias y nacionalidad de la persona afectada por la medida. Datos desde 2000-actualidad.*

*4. - Evolución del número internamiento en Centros de Internamiento para extranjeros desde 2000-2020, diferenciada por motivo legal de internamiento, plantilla de policía que solicita el internamiento y nacionalidades de las personas afectadas".*

El 12 de marzo de 2020, conforme al artículo 20.1 de la LTAIPBG, se remitió a [redacted] notificación comunicándole la ampliación de plazo para resolver por un mes más debido al volumen y complejidad de la información solicitada.

Igualmente, en virtud del Real Decreto 463/2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, le fue notificado la suspensión e interrupción de los plazos para la tramitación de la presente solicitud de acceso a la información pública, siendo informado de que el cómputo del plazo



para notificar la resolución de su solicitud se reanudaría en el momento en que perdiera vigencia el citado Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

Una vez expuesto lo anterior, en relación a las cuestiones planteadas este Centro Directivo participa lo siguiente:

1.- Por lo que respecta al primer punto señalar que los contratos de servicios sanitarios y asistencia básica prestados en los Centros de Internamiento de Extranjeros de forma individualizada son los siguientes:

- Servicio de reconocimientos médicos y asistencia sanitaria.
- Servicio de provisión, elaboración y servicio diario de la alimentación.

Al respecto, se informa que la información sobre contratos y licitaciones públicas efectuadas por la Dirección General de la Policía se encuentra publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público accesible a través del enlace <https://contrataciondelestado.es>.

2.- En cuanto a la formación especializada impartida al personal que actúa en los Centros de Internamiento de Extranjeros se informa que desde el año 2015 hasta la actualidad el Centro de Actualización y Especialización ha impartido con periodicidad anual un curso específico de formación para funcionarios destinados en CIE.

3.- No es posible facilitar la información relativa al número de medidas cautelares adoptadas en el marco de un procedimiento de expulsión o devolución, detallado por provincias y nacionalidad de la persona afectada sin incurrir en un proceso de reelaboración previa de la información contemplado como motivo de inadmisión en el artículo 18.1 c) de la LTAIBG.

En este sentido, a tenor de lo dispuesto en el criterio interpretativo 7/2015, la información solicitada por no constituye precisamente una mera agregación o suma de datos o un mínimo tratamiento de los mismos. Por el contrario, suministrar la información en los términos que ha sido solicitada supondría realizar un análisis pormenorizado de las medidas cautelares llevadas a cabo en cada procedimiento de expulsión o devolución, así como de cada internamiento realizado en un Centro de Internamiento de Extranjeros en el periodo 2000-2020.

Es decir, en el presente caso se está pidiendo una información que a día de hoy no se dispone y cuya obtención no es asumible, pues implica analizar uno por uno los miles de expedientes de expulsión y devolución así como de internamientos producidos en los últimos veinte años.

Por lo tanto, el tratamiento previo de la información al objeto de poder proporcionársela a la ciudadana en los términos que la ha interesado implicaría,





según lo dispuesto en la LTAIBG, producir información que antes no se tenía en los términos solicitados, es decir, facilitar la información que el ciudadano solicita requeriría una elaboración y tarea de confección por no ser fácilmente asequible acceder a ella.

En este sentido se ha manifestado la jurisprudencia, recogiendo la Sentencia 60/2016, de 18 de mayo, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Madrid que "el artículo 13 de la citada Ley, que reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, pero a la información que existe y que esta ya disponible, lo que es distinto, de reconocer el derecho a que la Administración produzca, aunque sea con medios propios, información que antes no tenía".

En la misma línea se manifiesta la Sentencia dictada por la Sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (recurso de Apelación 63/2016) cuando concluye que "el derecho a la información no puede ser confundido con el derecho a la confección de un informe por un órgano público a instancias de un particular", por lo que, tal y como se ha señalado anteriormente, a juicio de este Centro Directivo constituye un supuesto de reelaboración de la información en el sentido del art. 18.1 c) de la LTAIBG y, en consecuencia, ha de ser desestimada.

4.- Por último, en relación con la evolución del número de ingresos en Centros de Internamiento de Extranjeros desglosada por motivo de internamiento, plantilla policial que solicita el internamiento y nacionalidad de las nacionalidades afectadas, adjunto se remite archivo excel.

No pueden facilitarse los datos relativos a la plantilla policial que solicita el ingreso sin incurrir en un proceso de reelaboración previa de la información contemplado como motivo de inadmisión en el artículo 18.1.c) de la LTAIBG.

Igualmente, no se facilitan los datos sobre la nacionalidad de las personas internadas, ya que la difusión de este tipo de datos estadísticos podría derivar en problemas en las relaciones exteriores de España con los posibles países afectados, dificultando en el futuro poder documentar por parte de las diferentes Embajadas y Consulados a ciudadanos extranjeros irregulares, lo que afectaría gravemente a la eficacia de nuevas expulsiones, aplicándose a esta parte de la información el artículo **14.1 c)** de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia



y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA**



**Francisco Pardo Piqueras**